



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

54ª REUNIÓN — 22ª SESIÓN ORDINARIA (Continuación)

15 DE DICIEMBRE DE 1994

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor EDUARDO MENEM,

del señor vicepresidente del Honorable Senado,
don ORALDO N. BRITOS,

y del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado,
ingeniero FAUSTINO M. MAZZUCCO

Secretarios: doctor EDGARDO RENÉ PIUZZI y señor EDGARDO P.V. MURGUÍA

Prosecretarios: señor JUAN JOSÉ CANALS y doctor DONALDO ANTONIO DIB

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
ALASINO, Augusto
AVELÍN, Alfredo
BITTEL, Deolindo F.
BORDON, José O.
BRANDA, Ricardo A.
BRITOS, Oraldo N.
CABANA, Fernando V.
CAFIERO, Antonio F.
CENDOYA, Jorge J.
DE LA RÚA, Fernando
FADEL, Mario N.
GENOUD, José
HUMADA, Julio C.
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
LEÓN, Luis A.
LUDUEÑA, Felipe E.
MAC KARTHY, César
MARTÍNEZ, Daniel E.
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MASSAT, Jorge
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo
MIRANDA, Julio
MOLINA, Pedro E.
OYARZÚN, Juan C.

PEÑA de LÓPEZ, Ana M.
RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO, Juan C.
ROMERO FERIS, José A.
RUBEO, Luis
SÁNCHEZ, Libardo N.
SAN MILLÁN, Julio A.
SAPAG, Felipe R.
SOLANA, Jorge D.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
STORANI, Conrado H.
VERNA, Carlos A.
VILLARROEL, Pedro G.

AUSENTES, CON AVISO:

BRAVO, Leopoldo
COSTANZO, Remo J.
FIGUEROA, José O.
JUÁREZ, Carlos A.
SNOPEK, Guillermo E.

EN COMISION:

LOSADA, Mario A.
VACA, Eduardo P.

POR ENFERMEDAD:

OTERO, Edison

SUMARIO

1. Consideración del proyecto de ley en revisión por el que se ordena la publicación del texto oficial de la Constitución Nacional, sancionada en 1853 con las reformas de los años 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994 (C.D.-99/94). Se aprueba. (Pág. 5300.)
2. A moción del señor senador Alasino se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley del señor senador Molina y otros señores senadores por el que se modifica el régimen electoral nacional y se derogán diversas leyes al respecto (P.E.-361/94 y S.-1.539/94). (Pág. 5320.)
3. A moción del señor senador Branda se considera sobre tablas y se aprueba un proyecto de resolución por el que se designa al señor senador Oraldo N. Britos como representante titular del Honorable Senado en la Comisión Administradora de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación (D.R.-1.185/94). (Pág. 5340.)
4. A moción del señor senador Genoud se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del que es autor por el que se solicita la eliminación del vino y los duraznos industrializados de la lista de excluidos del régimen denominado arancel cero en gestión con el Brasil en el marco del Mercosur (S.-1.524/94). (Pág. 5342.)
5. Consideración sobre tablas del proyecto de ley en revisión por el que se aprueba un convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa y el gobierno de la provincia de Buenos Aires el 28 de diciembre de 1992 y se excluyen de las disposiciones de la ley 24.045 los terrenos correspondientes al complejo industrial Ramallo-San Nicolás (C.D.-73/94). Se aprueba. (Pág. 5343.)
6. Consideración sobre tablas del proyecto de resolución del señor senador Cafiero por el que se dispone la publicación de la labor legislativa de la Comisión de Ecología y Desarrollo Humano (S.-1.523/94). Se aprueba. (Pág. 5349.)
7. A pedido del señor senador Sánchez se recomienda pronto despacho a las comisiones de Interior y Justicia y de Presupuesto y Hacienda para el proyecto de ley del que es autor por el que se autoriza la construcción de un monumento al soldado desconocido representado en la figura del gaucho Rivero en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz (S.-44/94). (Pág. 5350.)
8. Apéndice:
Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 5354.)

— En Buenos Aires, a las 15 y 40 del jueves
15 de diciembre de 1994:

Sr. Presidente (Menem). — Continúa la sesión.

1

PUBLICACION
DE LA CONSTITUCION NACIONAL

Sr. Presidente (Menem). — Corresponde considerar el proyecto de ley en revisión por el que se ordena la publicación del texto oficial de la Constitución Nacional contenido en el expediente C.D.-99/94, conforme al plan de labor que fue oportunamente acordado por los presidentes de bloque y aprobado por este cuerpo.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (PiuZZi). — (Lee)

El Senado y Cámara de Diputados, etc....

Artículo 1º — Ordénase la publicación del texto oficial de la Constitución Nacional (sancionada en 1853 con las reformas de los años 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994) que es el que se transcribe a continuación:

Constitución de la Nación Argentina

PREAMBULO

Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina.

PRIMERA PARTE

CAPÍTULO PRIMERO

Declaraciones, derechos y garantías

Artículo 1º — La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución.

Art. 2º — El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano.

Art. 3º — Las autoridades que ejercen el Gobierno federal, residen en la ciudad que se declare Capital de la República por una ley especial del Congreso, previa cesión hecha por una o más legislaturas provinciales, del territorio que haya de federalizarse.

Art. 4º — El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcio-

recho canónico del medioevo, ya que cuando se hacían las recopilaciones de las normas de ese derecho y alguna quedaba afuera, si bien no se dejaba de reconocer que era una norma legal, se la consideraba extravagante. Es decir estaba fuera de la compilación, pero tenía valor. Se decía, entonces, que acá sucedía lo mismo. Y, finalmente, se optó por la mejor solución. ¿Cuál era esa mejor solución? La publicación del texto ordenado por parte del Congreso de la Nación, que luego de la Convención Constituyente es la máxima expresión del Poder Legislativo del país, y es a quien le corresponde cumplir con esa tarea. No es una atribución del Poder Ejecutivo, y en esto también voy a discrepar con mi colega y compañero senador que me antecedió en el uso de la palabra. El Poder Ejecutivo no podría haberlo hecho, pero sí —como dije— el Congreso de la Nación, ya que tiene las facultades pertinentes para ordenar la publicación del artículo y para resolver la cuestión de que no podía incorporarse como 68 bis porque era totalmente improcedente, sino que debía ser agregado como segunda parte del artículo 77. Esta, además, fue la idea primitiva contenida en el Pacto de Olivos y en la ley 24.309.

Por eso, señor presidente, creo que no cabe la menor duda de que el texto del artículo 68 bis es constitucional y que el medio que debe ser elegido para salvar la omisión de su no publicación es este Congreso de la Nación.

En consecuencia, basándonos en el principio de la realidad, que adopta el constitucionalismo, creo que corresponde votar este proyecto para salvar esa omisión. De esta manera, dejo expresados mis fundamentos y mi solicitud de que se vote afirmativamente.

Sr. Presidente (Mazzucco). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — Señor presidente, señores senadores: corresponde a la responsabilidad que me incumbe explicar el sentido de mi voto, que adelante será favorable a la iniciativa, que estamos considerando. No precisamente porque entienda indispensable el dictado de la ley sino porque lo estimo conveniente.

A las consideraciones que se han hecho me gustaría agregar dos o tres muy breves.

En primer lugar, que en el contexto normativo en que se desarrolla la Convención Constituyente, vale decir la ley declarativa de la necesidad de la reforma, ya surgía una alternativa de hierro, puesto que marcaba una forma de votación, por sí o por no, de la totalidad de las

normas contenidas en el artículo 2º, que eran las recogidas por el llamado Núcleo de Coincidencias Básicas. De tal modo que no sancionar alguna de las normas incorporadas en dicho núcleo importaba incurrir en la nulidad de todas las otras sanciones contenidas en el mismo artículo. Esa hubiese sido la conclusión.

En segundo término, participo del viejo concepto jurídico según el cual la publicidad no es requisito de obligatoriedad de la norma para los órganos estatales; sí lo es respecto al súbdito, que no puede ser obligado sino por aquellas normas que son adecuadamente publicadas. Pero el requisito de publicidad no rige para la obligatoriedad para los órganos estatales productores de la norma.

De todas maneras, no conozco con exactitud cómo fue la sanción de la Convención Constituyente a la que se refiere el señor senador por La Rioja, de iniciativa del señor convencional Cullen. Pero en definitiva, no habiendo dudas jurídicas respecto de la vigencia y el vigor normativo de esa sanción del ahora artículo 77, creo que se llega a esta solución. Si bien no es indispensable, creo que es conveniente en aras de la certidumbre, que constituye también un elemento de seguridad jurídica.

Sr. Presidente (Mazzucco). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Mazzucco). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Eduardo Menem.

2

MODIFICACION DEL CODIGO ELECTORAL NACIONAL

Sr. Presidente (Menem). — Corresponde considerar el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifica el régimen electoral nacional y se derogan diversas leyes al respecto. Se trata del expediente P.E.-361/94, mensaje 1.828/94.

Asimismo, corresponde considerar el proyecto de ley de los señores senadores Molina, Genoud, Britos y Alasino, referido al mismo tema, presentado hoy, y cuyo número de expediente es el S.-1.539/94.

Sr. Alasino. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Quiero ordenar el tema reglamentario.

El primero de los proyectos tiene una preferencia con dictamen de comisión. Con relación al otro proyecto sobre el mismo tema, que lleva la firma de quien habla y otros señores senadores, para eliminar el obstáculo de trámite creo que debemos aprobar su tratamiento sobre tablas, que solicito en este momento.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador por Entre Ríos. Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: a juicio de esta bancada es conveniente adoptar esta metodología: al no tener dictamen de comisión el proyecto originado en el Poder Ejecutivo, y habiendo un nuevo proyecto —más breve, por cierto, que ingresó en el día de la fecha—, votaremos favorablemente la moción del señor senador por Entre Ríos, es decir la moción de tratamiento sobre tablas.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (PiuZZi). — (Lee)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º — Sustitúyanse los artículos 60, 61, 108, 112 y 120 de la ley 19.945 — modificada por las leyes 20.175, 22.838, 22.864 y 24.012 — (texto ordenado por el decreto 2.135 del 18 de agosto de 1983) del Código Nacional Electoral, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

Artículo 60: *Registro de los candidatos y pedido de oficialización de listas.* Desde la publicación de la convocatoria y hasta cincuenta (50) días anteriores a la elección, los partidos registrarán ante el juez electoral las listas de los candidatos públicamente proclamados, quienes deberán reunir las condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no estar comprendidos en algunas de las inhabilidades legales.

En el caso de la elección de presidente y vicepresidente de la Nación, la presentación de las listas de candidatos se realizará ante el juez federal con competencia electoral de la Capital Federal.

Las listas que se presenten deberán tener mueres en un mínimo de un treinta por ciento (30%) de los candidatos a los cargos a elegir y en propor-

ciones con posibilidad de resultar electas. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos.

Los partidos presentarán, juntamente con el pedido de oficialización de listas, datos de filiación completos de sus candidatos y el último domicilio electoral. Podrán figurar en las listas con el nombre con el cual son conocidos, siempre que la variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a confusión a criterio del juez.

Artículo 61: *Resolución judicial.* Dentro de los cinco días subsiguientes el juez dictará resolución, con expresión concreta y precisa de los hechos que la fundamentan, respecto de la calidad de los candidatos. La misma será apelable dentro de las cuarenta y ocho (48) horas ante la Cámara Nacional Electoral, la que resolverá en el plazo de tres (3) días por decisión fundada.

Si por sentencia firme se estableciera que algún candidato no reúne las calidades necesarias se correrá el orden de listas de los titulares, y se completará con el primer suplente, trasladándose también el orden de éstas; y el partido político que pertenezca podrá registrar otro suplente en el último lugar de la lista en el término de cuarenta y ocho (48) horas a contar de aquella resolución. En la misma forma se sustanciarán las nuevas sustituciones.

En caso de muerte o renuncia de cualquiera de los candidatos de la fórmula a presidente y vicepresidente de la Nación, los partidos políticos o alianzas electorales a las que pertenezcan podrán registrar a otros candidatos en su lugar en el término de siete (7) días corridos.

Todas las resoluciones se notificarán por telegrama colacionado, quedando firme después de cuarenta y ocho (48) horas de notificadas.

La lista oficializada de candidatos será comunicada por el juez a la Junta Electoral dentro de las veinticuatro (24) horas de hallarse firme su decisión o inmediatamente de constituida la misma en su caso.

Artículo 108: *Designación de fiscales.* Los partidos que hubiesen oficializado listas de candidatos podrán designar fiscales con derecho a asistir a todas las operaciones del escrutinio a cargo de la Junta, así como a examinar la documentación correspondiente.

El control del comicio por los partidos políticos comprenderá, además, la recolección y transmisión de los datos del escrutinio provisorio de y a los centros establecidos para su cómputo, y el procesamiento informático de los resultados provisorios y definitivos, incluyendo el programa (software) utilizado. Este último será verificado por la Justicia Electoral, que mantendrá una copia bajo resguardo y permitirá a los partidos las comprobaciones que requieran del sistema empleado, que deberá estar disponible a esos fines con suficiente antelación.

Artículo 112: *Procedimiento del escrutinio.* Vencido el plazo del artículo 110, la Junta Electoral Nacional realizará el escrutinio definitivo, el que deberá quedar concluido en el menor tiempo posible.

A tal efecto se habilitarán días y horas necesarios para que la tarea no tenga interrupción. En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación lo realizará en un plazo no mayor de diez (10) días corridos.

El escrutinio definitivo se ajustará, en la consideración de cada mesa, al examen del acta respectiva para verificar:

1. Si hay indicios de que haya sido adulterada.
2. Si no tiene defectos sustanciales de forma.
3. Si viene acompañado de las demás actas y documentos que el presidente hubiere recibido o producido con motivo del acto electoral y escrutinio.
4. Si admite o rechaza las protestas.
5. Si el número de ciudadanos que sufragaron según el acta coincide con el número de sobres remitidos por el presidente de la mesa, verificación que sólo se llevará a cabo en el caso de que medie denuncia de un partido político actuante en la elección.
6. Si existen votos recurridos los considerará para determinar su validez o nulidad, computándolos en conjunto por sección electoral.

Realizadas las verificaciones preestablecidas, la Junta se limitará a efectuar las operaciones aritméticas de los resultados consignados en el acta, salvo que mediare reclamación de algún partido político actuante en la elección.

Artículo 120: *Cómputo final*. La Junta sumará los resultados de las mesas ateniéndose a las cifras consignadas en las actas, a las que se adicionarán los votos que hubieren sido recurridos y resultaren válidos y los indebidamente impugnados y declarados válidos, de los que se dejará constancia en el acta final, acordando luego un dictamen sobre las causas que a su juicio funden la validez o nulidad de la elección.

En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación las Juntas Electorales Nacionales, dentro del plazo indicado en el primer párrafo del artículo 112, comunicarán los resultados al presidente del Senado de la Nación. El mismo convocará de inmediato a la Asamblea Legislativa, la que procederá a hacer la sumatoria para determinar si la fórmula más votada ha logrado la mayoría prevista en el artículo 97 de la Constitución Nacional o si se han producido las circunstancias del artículo 98 o si por el contrario, se deberá realizar una segunda vuelta electoral conforme lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución Nacional.

En este último supuesto se hará saber tal circunstancia al Poder Ejecutivo nacional y a los apoderados de los partidos políticos, cuyas fórmulas se encuentren en condiciones de participar en la segunda vuelta.

La Asamblea Legislativa comunicará los resultados definitivos de la primera vuelta electoral dentro del plazo de quince (15) días corridos de haberse realizado la misma.

Igual procedimiento, en lo que correspondiere, se utilizará para la segunda vuelta electoral.

Artículo 122. — *Proclamación de los electos*. La Junta o la Asamblea Legislativa, en su caso, proclamarán a los que resultaren electos, haciéndoles entrega de los documentos que acrediten su carácter.

Art. 2º — Sustitúyase el título VII — artículos 148 a 157 — de la ley 19.945 — modificada por las leyes 20.175, 22.838, 22.864 y 24.012 — (texto ordenado por el decreto 2.135 del 18 de agosto de 1983) de Código Electoral Nacional, por el siguiente texto:

TÍTULO VII

Del Régimen Electoral Nacional

CAPÍTULO I

De la elección de presidente y vicepresidente de la Nación

Artículo 148. — El presidente y vicepresidente de la Nación serán elegidos simultánea y directamente, por el pueblo de la Nación, con arreglo al sistema de doble vuelta, a cuyo fin el territorio nacional constituye un único distrito.

La convocatoria deberá hacerse con una anticipación no menor de noventa (90) días y deberá celebrarse dentro de los dos (2) meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente y vicepresidente en ejercicio.

La convocatoria comprenderá la eventual segunda vuelta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo siguiente.

Cada elector sufragará por una fórmula indivisible de candidatos a ambos cargos.

Artículo 149. — Resultará electa la fórmula que obtenga más del cuarenta y cinco (45) por ciento o más de los votos afirmativos válidamente emitidos; en su defecto, aquella que hubiere obtenido el cuarenta (40) por ciento o más de los votos afirmativos válidamente emitidos y, además, existiere una diferencia de más de diez (10) por ciento respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos, sobre la fórmula que le sigue en número de votos.

Artículo 150. — Si ninguna fórmula alcanzara esas mayorías y diferencias de acuerdo al escrutinio efectuado por la Juntas Electorales, y cuyo resultado único para toda la Nación será anunciado por la Asamblea Legislativa atento a lo dispuesto por el artículo 120 de la presente ley, se realizará una segunda vuelta dentro de los treinta (30) días.

Artículo 151. — En la segunda vuelta participarán solamente las dos fórmulas más votadas en la primera, resultando electa la que obtenga mayor número de votos afirmativos válidamente emitidos.

Artículo 152. — Dentro del quinto día de proclamadas las dos fórmulas más votadas, éstas deberán ratificar por escrito ante la Junta Electoral Nacional de la Capital Federal su decisión de presentarse a la segunda vuelta. Si una de ellas no lo hiciera, será proclamada electa la otra.

Artículo 153. — En caso de muerte o renuncia de cualquiera de los candidatos de la fórmula que haya sido proclamada electa, se aplicará lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución Nacional.

Artículo 154. — En caso de muerte de los dos candidatos de cualquiera de las dos fórmulas más votadas en la primera vuelta electoral y antes de producirse la segunda, se convocará a una nueva elección.

En caso de muerte de uno de los candidatos de cualquiera de las dos fórmulas más votadas en la primera vuelta electoral, el partido político o alianza electoral que represente, deberá cubrir la vacancia en el término de siete (7) días corridos, a los efectos de concurrir a la segunda vuelta.

Artículo 155. — En caso de renuncia de los dos candidatos de cualquiera de las dos fórmulas más votadas en la primera vuelta, se proclamará electa a la otra.

En caso de renuncia de uno de los candidatos de cualquiera de las dos fórmulas más votadas en la primera vuelta electoral, no podrá cubrirse la vacante producida. Para el caso que la renuncia sea del candidato a presidente, ocupará su lugar el candidato a vicepresidente.

CAPÍTULO II

De la elección de senadores nacionales

Artículo 156: Los senadores nacionales por las provincias y la ciudad de Buenos Aires se elegirán en forma directa por el pueblo de las mismas que se considerarán a este fin como distritos electorales. La elección será convocada con una anticipación de noventa (90) días y deberá celebrarse dentro de los dos (2) meses anteriores al 10 de diciembre del año 2001 y así se hará sucesivamente en cada renovación bienal del cuerpo, respetándose los referidos plazos.

Cada elector votará por una lista oficializada con dos candidatos titulares y dos suplentes.

Artículo 157: El escrutinio de cada elección se practicará por lista sin tomar en cuenta las tachas o sustituciones que hubiere efectuado el votante.

Resultarán electos los dos titulares correspondientes a la lista del partido o alianza electoral que obtuviere la mayoría de los votos emitidos y el primero de la lista siguiente en cantidad de votos. El segundo titular de esta última lista será el primer suplente del senador que por ella resultó elegido. Los suplentes sucederán al titular por su orden en el caso previsto por el artículo 62 de la Constitución Nacional.

CAPÍTULO III

De los diputados nacionales

Artículo 158: Los diputados nacionales se elegirán en forma directa por el pueblo de cada provincia y de la Capital Federal que se considerarán a este fin como distritos electorales.

Cada elector votará solamente por una lista de candidatos oficializada cuyo número será igual al de

los cargos a cubrir con más los suplentes previstos en el artículo 63 de la presente ley.

Artículo 159: El escrutinio de cada elección se practicará por lista sin tomar en cuenta las tachas o sustituciones que hubiere efectuado el votante.

Artículo 160: No participarán en la asignación de cargos las listas que no logren un mínimo de tres (3) por ciento del padrón electoral del distrito.

Artículo 161: Los cargos a cubrir se asignarán conforme al orden establecido por cada lista y con arreglo al siguiente procedimiento:

- a) El total de los votos obtenidos por cada lista que haya alcanzado como mínimo el tres (3) por ciento del padrón electoral del distrito será dividido por uno (1), por dos (2), por tres (3) y así sucesivamente hasta llegar al número total de los cargos a cubrir;
- b) Los cocientes resultantes, con independencia de la lista de que provengan, serán ordenados de mayor a menor en número igual al de los cargos a cubrir;
- c) Si hubiere dos o más cocientes iguales se los ordenará en relación directa con el total de los votos obtenidos por las respectivas listas y si éstos hubieren logrado igual número de votos el ordenamiento resultará de un sorteo que a tal fin deberá practicar la junta electoral competente;
- d) A cada lista le corresponderán tantos cargos como veces sus cocientes figuren en el ordenamiento indicado en el inciso b).

Artículo 162: Se proclamarán diputados nacionales a quienes resulten elegidos con arreglo al sistema adoptado en el presente capítulo.

Artículo 163: En las convocatorias de cada distrito electoral se fijará el número de diputados nacionales titulares y suplentes. A estos fines se establecerá el número de suplentes que a continuación se expresa:

- Cuando se elijan 2 titulares: 2 suplentes.
- Cuando se elijan de 3 a 5 titulares: 3 suplentes.
- Cuando se elijan 6 y 7 titulares: 4 suplentes.
- Cuando se elijan 8 titulares: 5 suplentes.
- Cuando se elijan 9 y 10 titulares: 6 suplentes.
- Cuando se elijan de 11 a 20 titulares: 8 suplentes.
- Cuando se elijan 21 titulares o más: 10 suplentes.

Artículo 164: En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un diputado nacional lo sustituirán quienes figuren en la lista como candidatos titulares según el orden establecido.

Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán los cargos vacantes los suplentes que sigan de conformidad con la prelación consignada en la lista respectiva. En todos los casos los reemplazantes se desempeñarán hasta que finalice el mandato que le hubiere correspondido al titular.

Art. 3º — Incorpórase al título VIII de la ley 19.945 — modificada por las leyes 20.175, 22.838, 22.864 y

24.012— (texto ordenado por decreto 2.135 del 18 de agosto de 1983) de Código Electoral Nacional, los siguientes artículos:

Artículo 165: A los fines de la aplicación de la disposición transitoria cuarta contenida en la Constitución Nacional acerca de la elección de los senadores nacionales por las provincias y la ciudad de Buenos Aires, las Legislaturas de aquéllas y el órgano legislativo de ésta se reunirán, convocados de acuerdo al derecho local, con una anticipación no menor de sesenta (60) ni mayor de noventa (90) días, al momento en que los electos deben asumir sus funciones, para proceder tal como lo prevé la citada disposición transitoria.

En la ciudad de Buenos Aires, se celebrará durante 1995 la elección de senador nacional, a efectos de incorporar el tercer senador por el distrito. Cada elector votará por una lista oficializada con un candidato titular y un suplente.

Resultará electo el titular de la lista que obtuviere el mayor número de sufragio, y el suplente lo sustituirá en los casos previstos por el artículo 62 de la Constitución Nacional.

Artículo 166: A los fines de la aplicación de la disposición transitoria cuarta contenida en la Constitución Nacional acerca de la elección de senadores nacionales por las provincias en ocasión de la renovación parcial trienal de 1995, las Legislaturas en cada provincia procederán a la elección de un senador, conforme con la disposición constitucional que establece que sean tres los senadores por cada distrito y que no resulten los tres senadores del distrito de un mismo partido político o alianza electoral, de modo tal que, necesariamente, correspondan dos senadores nacionales a la mayoría y uno a la primera minoría.

Las Legislaturas provinciales deberán observar que el conjunto de los tres senadores nacionales por cada distrito se integre, de no resultar legalmente imposible, con dos bancas al partido o alianza electoral con el mayor número de miembros en dicha Legislatura y la banca restante corresponda al partido o alianza electoral que le siga en número de miembros. A estos efectos, el o los senadores en ejercicio deberán computarse al partido político o alianza electoral al cual pertenecían al momento de su elección.

En caso de empate, prevalecerá el partido o alianza que hubiere obtenido mayor cantidad de votos válidos emitidos en la elección de renovación legislativa inmediata anterior, en el nivel provincial.

Art. 4º — Modifícase la numeración de los artículos contenidos en el título VIII — Disposiciones generales y transitorias — Capítulo único, de la ley 19.945 — modificada por las leyes 20.175, 22.838, 22.864 y 24.012 — (texto ordenado por el decreto 2.135 del 19 de agosto de 1983) de Código Electoral Nacional, por la siguiente: a los artículos 158, 159 y 160 les corresponderán los números 167, 168 y 169 respectivamente.

Art. 5º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Señor presidente: el proyecto en tratamiento — contenido en el expediente S.-1.539/94 — modifica el régimen electoral nacional, las leyes 19.945 y sus modificatorias, 20.175, 22.838, 22.864 y 24.012.

En realidad, para ser breve, debo decir que la nueva Constitución impone unas reformas al Código Electoral para hacer posible el cumplimiento de lo que ella dispone en lo referente, fundamentalmente, a la elección de presidente, vicepresidente y senadores. Del mismo modo, procura alguna necesaria ordenación de los plazos a partir del mandato constitucional de realizar en treinta días la doble vuelta, y establecer una cierta claridad en cuanto a lo que puede ocurrir ante la situación de muerte o renuncia de uno de los integrantes de la fórmula presidencial en el lapso que va entre la primera y la segunda vuelta.

Esta cuestión, dicha así, a grandes rasgos, hace necesario que a la próxima elección del mes de mayo vayamos con el Código Electoral reformado, que atienda a esta nueva realidad electoral y política de la República Argentina.

En cuanto al régimen electoral, señor presidente, el viejo sistema del colegio electoral de la Constitución ha sido sustituido por la elección directa de presidente y de vicepresidente. Esto cambia sustancialmente la forma de elección y, consecuentemente, debe cambiar fundamentalmente el Código Electoral. Porque al eliminarse el colegio electoral y disponerse la elección directa de presidente y de vicepresidente, también debe establecerse el mecanismo de la doble vuelta o balotaje que fija la Constitución, y debe definirse en este aspecto — como lo hacía la Carta Magna para los diputados — al país como un distrito único en el cual se vota para la fórmula presidencial. Estos tres elementos son los que están contenidos en la propuesta de reforma al Código Electoral.

En la misma medida, se debe atender a la elección de los senadores, que ahora será directa, pero realizada por el pueblo de la provincia. Esto quiere decir que habrá veinticuatro distritos, y no uno solo. Esta combinación de distritos por provincias o por Capital Federal, más la elección directa, hace también que debamos reglamentar la situación de los senadores y el mecanismo de reemplazos que debe establecer el Código Electoral a partir de la elección

directa, y con referencia siempre a una relación política, legislativa o partidaria en cada provincia.

El otro tema importante que va a abordar la propuesta de reforma al Código Electoral es una cierta ordenación de los plazos, definida también por mandato constitucional.

En la Constitución se establece un plazo en el cual se debe proceder a la segunda vuelta, si correspondiere.

En la actividad electoral habitual esto supone una serie de posibilidades con relación a la conformidad o disconformidad de los habitantes o de los partidos frente a los mecanismos escrutadores. Por eso es necesario establecer un mecanismo de plazos que vaya eliminando los recursos o posibilidades de impugnación o reclamos que existan respecto de los resultados electorales, fundamentalmente en lo que hace a las fórmulas de presidente y vicepresidente. En este sentido, este proyecto establece un plazo en el artículo 61 y también ordena un plazo en el artículo 112.

Con referencia a la elección de presidente y vicepresidente, la iniciativa atiende a una cuestión de competencia y jurisdicción, es decir cuál será el juez competente frente al cual debe oficializarse la lista de presidente y vicepresidente de los distintos partidos políticos.

Asimismo, se regula el sistema de oficialización de listas de presidente y vicepresidente, estableciendo un mecanismo de presentación y uno de implementación de recursos, ante el juez y ante la Cámara Nacional Electoral —que en este aspecto sigue manteniendo la competencia—.

También se dispone que sea la Asamblea Legislativa la que finalmente dé a conocer al país, como si se tratara de una gran junta electoral, el resultado de la primera y de la segunda vuelta. Si se dan las condiciones para la proclamación de la fórmula, basta con la primera vuelta; de lo contrario, debe convocarse a una segunda vuelta o elección en el plazo establecido por la Constitución.

También la iniciativa se ocupa del tema del control del sufragio o acto eleccionario. Este control se realiza actualmente por disposición del Poder Ejecutivo. Luego de conversaciones mantenidas entre los integrantes de los distintos sectores que componen este cuerpo, hemos decidido que también quede incorporado al Código Electoral. De esta manera, el sistema de control allí establecido no estará solamente limitado a la designación de los fiscales: todo el trá-

mite del acto eleccionario podrá ser controlado por los partidos. Asimismo, se podrá controlar el mecanismo de computación del sufragio —cosa que actualmente se hace—.

La iniciativa también permitirá aclarar la situación en que quedan los partidos políticos y sus candidatos en lo que se refiere a la renuncia o muerte del presidente o del vicepresidente que ocurrieren en el lapso de treinta días que se extiende entre la primera y la segunda vuelta. Creemos que la propuesta es buena. Tal vez la decisión clave es si frente a la renuncia es posible el reemplazo por parte del partido político de uno de los dos términos de la fórmula.

Al establecer el proyecto que no sea así, creo que ha tenido en consideración dos valores —y, obviamente, ha optado por uno de ellos—: el valor de la transparencia, que da la posibilidad de que no se presente ni se pueda producir ningún manejo político mediante la instrumentación de la renuncia para sustituir a uno de los términos a efectos de mejorar el posicionamiento electoral en la segunda vuelta. Frente a este valor de la transparencia está la desigualdad —odiosa, si se quiere— que en un caso especial puede afectar a un partido político que deba ir a la segunda vuelta disminuido en su oferta electoral por haberse caído uno de los términos de la fórmula.

Frente a estos dos valores, el proyecto opta por el primero y decide que en ese caso específico es imposible que el partido sustituya a uno de los términos de la fórmula. En consecuencia, debe concurrir con uno de ellos: si fallece el vicepresidente, solamente con el presidente; y si fallece el presidente, el vicepresidente deberá cubrir el cargo de presidente.

Creo que en las demás situaciones el proyecto mantiene una lógica impecable porque va decidiendo y resolviéndolas según se vayan presentando.

Sr. Genoud. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Presidente (Menem). — Le solicitan una interrupción. ¿La concede?

Sr. Alasino. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: creo que ha habido un error involuntario.

En caso de fallecimiento de uno de los dos integrantes de la fórmula puede ser reemplazado por el partido al que pertenece. Es en caso de

renuncia donde se da el supuesto que el señor senador por Entre Ríos ha planteado.

Sr. Presidente (Menem). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Efectivamente. Quise decir en caso de renuncia y no en caso de fallecimiento. En caso de fallecimiento puede ser reemplazado.

El argumento de la opción que toma el proyecto frente a los valores en cuestión está referido específicamente a la renuncia. En lo demás —y ya termino, señor presidente—, como dije, el proyecto mantiene una lógica impecable y va resolviendo las situaciones según se vayan presentando.

Sr. Rubeo. — Pido la palabra para una interrupción.

Sr. Alasino. — Concedida.

Sr. Presidente (Menem). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Rubeo. — Muchas gracias, señor senador.

Señor presidente: como el señor senador por Entre Ríos está finalizando su informe quisiera preguntar, con respecto al artículo 166, que se refiere a la aplicación de la disposición transitoria para la elección de los senadores nacionales, dónde queda garantizado el espíritu de los convencionales constituyentes cuando dicen que se deben elegir a propuesta de los partidos, respetándose las cartas orgánicas de cada una de estas instituciones.

Sr. Genoud. — ¿Me permite una interrupción?

Esa es una norma que está garantizada por el texto expreso de la Constitución, de tal modo que no requiere de mayor aclaración por parte de una ley, que tiene menor envergadura que el texto de la Carta Magna.

Podría haberse reiterado la norma constitucional; pero es de tanta claridad que no venía al caso hacer alusión a ella.

Sr. Presidente (Menem). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Rubeo. — Continuando con la interrupción, señor presidente, debo decir que sin duda el tema de la elección de senadores por vía de colegios electorales y, en este caso, por la Asamblea Legislativa, ha generado conflictos que fueron de dominio público y que desdibujaron la imagen de lo que es la práctica plural del sistema democrático.

Creo que deberíamos insistir en trasladar lo que la Constitución ha tomado para que este principio sea claramente entendido por los señores legisladores en el momento en que deban fijar el mecanismo de tramitación para recoger lo que la entidad política ha determinado en un comicio interno o en un congreso, tal como lo puedan establecer los estatutos o la carta orgánica correspondiente.

Sr. Presidente (Menem). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Si me permite, señor presidente, voy a intentar responder al señor senador por Santa Fe.

Para el caso del senador, de la Constitución Nacional surge que el partido político debe comunicar al juez cuál ha sido el resultado de la elección, según el mecanismo que cada partido utilice para elegirlo, que puede ser por convención, por elección directa o por distritos. Esa información estará en el juzgado electoral de cada provincia con la carta orgánica aprobada. El juez, por su parte, controla si se ha cumplido el mecanismo que cada partido ha establecido para la elección interna. Si es así, el juez recepta cuál ha sido la voluntad del partido de proponer a una persona, o dos, para cubrir el cargo de senador. Es el juez quien envía a la Legislatura el nombre del candidato a senador por cada uno de los partidos. Este es el mecanismo.

En la ley electoral esto no debe estar, pero sí debe figurar cómo debe entenderse la actividad de la Legislatura, que es lo que este Código Electoral reglamenta, y las situaciones de mayorías y minorías de las legislaturas al momento de la elección.

No sé si ha quedado claro.

Creo que la preocupación del señor senador por Santa Fe está contemplada en este mecanismo que la Constitución recepta en el sentido de que recibida del partido la comunicación del senador, el juez debe hacer saber a la Legislatura provincial cuál es el candidato.

Estamos hablando obviamente de la metodología que para este aspecto establece la Constitución reformada en Santa Fe.

Sr. Rubeo. — Solicito una interrupción, señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Rubeo. — Sugiero hacer un cuarto intermedio con permanencia en las bancas para conversar respecto de este tema.

La cuestión es de tanta trascendencia y ha producido tantos conflictos que creo sería propicio —aun a riesgo de caer en redundancia al insistir en la cuestión— dejar perfectamente aclarado cuál es el espíritu de lo establecido por la Constitución, de modo que no existan dudas al respecto. Asimismo, para que el juez competente, en el momento de actuar, lo haga basándose en los claros criterios que con relación a este proyecto de ley electoral podamos establecer.

Concretamente hago moción de pasar a cuarto intermedio con permanencia en las bancas.

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia estima que corresponde concluir el tratamiento en general. Cuando entremos en el tratamiento en particular y lleguemos a ese punto, corresponderá votar el pedido de cuarto intermedio formulado por el señor senador por Santa Fe. Podría suceder que de la exposición de alguno de los señores senadores que están anotados en la lista de oradores surja algún otro elemento que clarifique la cuestión.

Prosigue en uso de la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Genoud. — ¿Me permite, señor senador?

Sr. Alasino. — Sí, señor senador.

Sr. Presidente (Menem). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — A ver si podemos ahorrarnos el cuarto intermedio.

Voy a leer el texto constitucional...

Sr. Presidente (Menem). — Señores senadores: están adelantando la discusión en particular. ¿Por qué no agotamos la discusión en general y pasamos a una sesión ordenada?

Sr. Genoud. — Es decir que el cuarto intermedio no se hará luego de la votación en general sino cuando se trate en particular este artículo.

Sr. Presidente (Menem). — Cuando se trate este artículo en particular o luego de concluida la consideración en general. Creo que hay que dar oportunidad a todos los señores senadores para que expongan en la discusión en general sus posiciones.

Sr. Genoud. — Correcto.

Sr. Presidente (Menem). — Señor senador por Santa Fe: ¿está de acuerdo con que su moción de cuarto intermedio sea postergada hasta el momento del tratamiento en particular?

Sr. Rubeo. — Por supuesto. Me interesa que seamos capaces de debatir sobre el fondo de la

cuestión y que quede como antecedente histórico el aporte que haga cada señor senador.

Sr. Presidente (Menem). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Señor presidente: el proyecto en consideración introduce otras modificaciones menores vinculadas con la elección de presidente, vicepresidente y senadores. Se mejoró la redacción en lo referente a diputados —y esto supone hacer una muy pequeña modificación al artículo 158, que ya la veremos—, pero sustancialmente no se cambió nada.

Finalmente, a los fines de la aplicación de la disposición transitoria cuarta contenida en la Constitución Nacional, se establecen en el Código Electoral los plazos en que deben ser elegidos los senadores en las legislaturas provinciales. Al respecto se dispone que las legislaturas provinciales y el órgano legislativo de la ciudad de Buenos Aires se reunirán con una anticipación no menor de sesenta días ni mayor de noventa al momento en que los electos deben asumir sus funciones.

Se ha fijado con precisión el caso atípico de la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente en la elección de 1995, porque allí se va a dar la excepción a la elección indirecta que la Constitución por norma transitoria ha establecido hasta el 2001, año en el cual entrará en vigencia plenamente lo vinculado con el Senado.

Asimismo, y ya estábamos adelantando la discusión en particular con el señor senador por Santa Fe, quisimos darle precisión a la elección de senadores. En ese sentido, con la redacción del artículo 166, nos anticipamos a las dificultades que puedan producirse en el reemplazo y elección de senadores.

Por último, debo decir que tratándose este proyecto de una modificación a la ley electoral, y teniendo en cuenta la Constitución vigente así como también la ley que acabamos de sancionar, requiere de una mayoría especial para su aprobación. Y este tema de la mayoría especial está vinculado con lo que señalaba hace unos instantes acerca de la urgencia que impone la nueva Constitución para arribar a acuerdos políticos en temas claves para la República, como en este caso específico es el régimen electoral.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: hace una semana que en la comisión respectiva estamos abocados al estudio de un nuevo Código Electoral,

que se originó en un proyecto del Poder Ejecutivo nacional.

Ese proyecto de nuevo Código Electoral tenía 117 artículos y como toda legislación en esta materia abarca desde la determinación del sistema electoral tanto para presidente y vicepresidente como para legisladores nacionales hasta, incluso, la reglamentación del tamaño y forma de las boletas con las que se debía concurrir a los comicios.

Ese proyecto, en primer lugar, estaba siendo tratado con una gran celeridad en virtud de que nos encontramos ante la proximidad de una elección general, ya convocada para el 14 de mayo, por lo cual semejante iniciativa se veía ante el obstáculo de un tratamiento precipitado, que no estaba de acuerdo, obviamente, con la importancia y gravitación institucional que tiene este tema.

Por estas razones fue que en un comienzo nosotros planteamos la posibilidad —que afortunadamente se ha concretado en el proyecto que ha ingresado por Mesa de Entradas y que estamos tratando en este momento— de aprobar una ley electoral mínima que se limitara a adecuar la legislación vigente a la nueva Constitución Nacional sancionada en el curso de este año, postergando para una nueva oportunidad parlamentaria el estudio y análisis del proyecto de nuevo Código Electoral. Esto nos permitiría trabajar con el suficiente tiempo para sancionar una ley que debería contar, en lo posible, con el acuerdo unánime de todos los sectores que componen el Parlamento, dado que el sistema electoral es un poco el pacto de garantías del sistema político democrático.

El proyecto que hoy estamos analizando es, reitero, un proyecto mínimo. Si bien se ha modificado una veintena de artículos del Código Electoral vigente, son muy pocas las modificaciones que se han introducido en esos artículos, que están reproducidos textualmente en el proyecto.

Así, por ejemplo, modificamos el artículo 60 de la ley 19.945, que es la base del Código Electoral, pero solamente incorporando un segundo párrafo que establece, para el caso de elección de presidente y vicepresidente, la presentación de listas de candidatos, que no existía en el sistema indirecto a través de electores.

En el artículo 61 también se incorpora un tercer párrafo manteniéndose absolutamente vigente todo el texto originario sancionado por la ley 19.945. Esta norma que se incorpora se refiere al caso de muerte o renuncia de cualquiera

de los dos candidatos de la fórmula de presidente y vicepresidente de la Nación. Cuando hablamos en este artículo de la muerte o renuncia del presidente o vicepresidente, nos referimos al caso de que ella se produzca antes de que se realice la elección, es decir antes de la primera vuelta en el nuevo sistema de elección directa con "ballottage".

En el artículo 108 se agrega una cláusula que perfecciona los sistemas de fiscalización por parte de los partidos políticos.

En el artículo 112, que es una extensa norma, se ha incorporado solamente un párrafo final en la primera parte del artículo, mediante el cual se fija un término para la duración del escrutinio porque, en general, se establecía que el escrutinio debía realizarse a la brevedad posible. Pero tratándose de un sistema de "ballottage" y habiendo solamente un plazo de treinta días entre la primera y la segunda vuelta, era necesario reducir el plazo del escrutinio.

Estoy exponiendo todas estas cuestiones, señor presidente, para que se advierta que el proyecto ha procurado ser lo más breve posible con el objetivo de adecuar la legislación electoral vigente a la nueva Constitución.

En el artículo 120 se hace referencia al sistema del cómputo final. Y aquí creo que hemos avanzado mucho con relación al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. En el proyecto en consideración se consagra a la Asamblea Legislativa como el órgano encargado de realizar el cómputo final. Cada junta electoral provincial deberá remitir al presidente del Senado los datos correspondientes a los efectos de determinar si hay una fórmula ganadora, en cuyo caso se la proclama; y si hay dos fórmulas respecto de las que se da el supuesto del artículo 96 de la Constitución Nacional, se deberá notificar al Poder Ejecutivo y a los apoderados de ambos partidos políticos, los que han salido primero y segundo, a fin de convocarlos a la segunda vuelta electoral.

La gran novedad de este proyecto de ley que estamos analizando está contenida en un nuevo título, el VII. Es absolutamente nuevo porque determina cuál es el mecanismo de funcionamiento del sistema directo con "ballottage".

Bien lo explicó el señor senador por Entre Ríos; por lo tanto, no voy a extenderme en el tema respecto de cómo funciona el sistema de "ballottage". Sí creo que es interesante desde el punto de vista político señalar cuál es el sistema para resolver los casos de acefalía entre la primera y la segunda vuelta electoral, como bien lo describió el señor miembro informante.

Quiero señalar que el espíritu que se tuvo es evitar toda forma de maniobra o especulación política para recomponer las fórmulas que deben competir en la segunda vuelta electoral, porque la recomposición de las fórmulas en el sistema de "ballottage" es un modo de adulterar la voluntad popular, que, en la propia naturaleza jurídica de este sistema, tiene que optar entre las dos fórmulas más votadas. Recomponer, a través de la renuncia de uno de los integrantes de una fórmula, un binomio de presidente y vicepresidente significa alejarnos del principio que da nacimiento al "ballottage", cual es el de optar entre las dos fórmulas que obtuvieron mayor cantidad de votos.

En los artículos siguientes se hace alusión al sistema para elegir senadores a partir del 2001, que a nuestro juicio consagra el saludable principio del senador por la minoría u oposición en cada provincia y el sistema de elección directa. Además, se hacen algunas precisiones respecto a la elección del senador de la minoría por parte de las Legislaturas para 1995 y 1998.

Quiero terminar, señor presidente, dada la claridad de la exposición del miembro informante del proyecto y lo reducida y clara que es esta norma, diciendo que considero saludable la iniciativa del señor senador por Santa Fe en el sentido de incorporar una cláusula que no diga literal y textualmente lo que ya consagró la Constitución Nacional con relación a la certificación que los partidos políticos deben hacer de la nominación del candidato a senador por la minoría o candidato al que corresponde reemplazar a un senador cuyo mandato vence en 1995 o 1998, pero entiendo que no debe ser el mismo texto constitucional sino algo que especifique aún más el concepto que nuestra Constitución Nacional expresa en su texto.

En una palabra, señor presidente, queda para un futuro no muy lejano el estudio de un nuevo Código Electoral. Y digo una vez más, ya que es un concepto admitido, que dentro del sistema electoral están realmente las garantías del buen funcionamiento de una democracia, juntamente con la Ley de los Partidos Políticos y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Por lo tanto, uno de los grandes desafíos parlamentarios que nos quedan para el año que viene es una nueva ley electoral que compendie todas las normas que hacen al funcionamiento de los sistemas electorales del país.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes, bloque autonomista.

Sr. Romero Feris. — Señor presidente, señores senadores: en nombre del bloque autonomista al que represento me voy a referir a estas modificaciones propuestas al régimen electoral nacional que, hasta el día de ayer, habían sido elaboradas por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General según un dictamen sobre el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, y que perdieron vigencia a partir de una negociación entre los partidos mayoritarios, dándose a luz un nuevo proyecto.

A partir de la reforma constitucional se hizo necesaria la modificación del régimen electoral nacional para adaptarlo a los cambios que introdujo la Convención Constituyente reunida en Santa Fe y Paraná, referidos al modo de elección del presidente y vicepresidente de la Nación en forma directa con la posibilidad de una doble vuelta, a la elección directa de los senadores nacionales con representación de las minorías y a la institución de la consulta popular.

Es así, señor presidente, como era dable esperar, que esta ley reglamentaria de las modificaciones que la nueva Constitución plasmara se nos presenta como una continuidad jurídica de las mismas. Debo ser coherente en este aspecto: más allá de las bondades o críticas que las modificaciones propuestas me provocan, no puedo dejar de señalar ante esta Honorable Cámara que la actitud equivocada que grandes sectores del justicialismo y el radicalismo evidenciaron a partir del Pacto de Olivos para dar nacimiento a esta reforma constitucional se ha mantenido en el proyecto en tratamiento, de cuya participación y discusión a los partidos minoritarios se nos ha marginado; no se nos ha consultado en absoluto.

Así, grandes sectores de la sociedad que representamos tampoco tuvieron la participación en la reforma constitucional que consideramos debían tener.

Lo mismo sucedió con la ley electoral, teniendo en cuenta su importancia y lo que ella significa; como expresara Joaquín V. González, es "la base de la existencia de la Constitución Nacional, es la vida misma del régimen representativo republicano que nos hemos dictado".

La inmensa mayoría de la sociedad argentina es consciente, sin duda alguna, de la importancia de la ley electoral, la cual está destinada a regular los principios rectores que guiarán la conquista, el control o la conservación del poder, haciendo efectiva la forma de gobierno. Asimismo se vincula íntimamente, nada más ni

nada menos, que con el ejercicio de los derechos políticos hoy consagrados expresamente en el artículo 37 de nuestra Constitución Nacional.

Es oportuno recordar que esta cuestión ocupa actualmente un lugar destacado en el análisis y consideración de los derechos humanos en el continente americano, ya que los derechos políticos en general y los procesos electorales en particular son considerados por el propio sistema interamericano de protección como parte esencial de la vigencia de los derechos fundamentales. Solo basta examinar en este sentido los artículos 23 y 27 del Pacto de San José de Costa Rica.

Nuestra Constitución establece en su artículo 1º que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, y en el artículo 22 reafirma que: "El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución".

A pesar de esto, en los últimos años por acción de gobiernos, políticos y doctrinarios, diferentes formas de participación directa del pueblo en cuestiones de gobierno fueron germinando y han sido recientemente incorporadas a nuestra Constitución Nacional, como surge de la sola lectura de los artículos 39 y 40 que consagran la iniciativa y la consulta popular.

Estas nuevas formas encuentran su justificativo en la necesidad cuantitativa y cualitativa de los representantes de sentir acrecentada y sustentada la legitimidad del mandato.

Por eso, así como el sistema sufrió a lo largo de la historia movimientos que marcaron la rectificación de su rumbo buscando mecanismos de mayor consenso social, hoy el mismo vuelve a entrar en crisis, encontrándose cuestionados en el marco comunitario muchos aspectos del sistema electoral vigente en el país.

Los largos años de intervencionismo estatal, no sólo en la economía sino en todos los ámbitos del quehacer humano, desembocaron en un deterioro de los valores básicos que deben regir los sistemas democráticos, arrastrando irremediablemente la confianza en las instituciones republicanas, en los partidos políticos y en los estratos dirigenciales de la sociedad, llevando a un estado semideliberativo al cuerpo comunitario bajo el convencimiento de que la legitimidad de los mandatarios no pasaba exclusivamente por el acto formal del voto.

La crisis resulta de tal gravedad que muchos integrantes de la sociedad mutaron el mandato dado a los representantes, asignándole características imperativas, como sostenía Rousseau,

pretendiendo ver en el ejercicio de las funciones de gobierno no un acto esencialmente libre sino una especie de "comisariado", según el cual el gobernante es un prisionero del pueblo que lo eligió.

La dirigencia política principalmente, pero también la dirigencia en los distintos ámbitos institucionales privados y públicos, ha intentado dar respuesta eficiente a los cambios generados vertiginosamente en la sociedad, pero en muchos casos no ha dimensionado el alcance y la repercusión que los mismos tendrían.

La influencia del avance tecnológico, la competitividad acrecentada desmedidamente en la sociedad de nuestra época y censurable, no como búsqueda de la excelencia, pero sí en la medida en que su objetivo se destine principalmente a la satisfacción de requerimientos materiales, el intercambio económico, cultural y social entre países —hoy superando las fronteras tradicionales para transformarse en relaciones interbloques— constituyen causas que llevan a un replanteo del sistema de representación y de legitimidad, no como forma de cuestionar el mismo en su esencia, pero sí como modo de buscar incansablemente alternativas de perfeccionamiento y de mayor consenso.

El debate sobre la reforma electoral —reflejo de esta crisis que vengo sosteniendo— fue puesto en marcha en el país en los primeros años del retorno a la democracia, y de él se hicieron eco analistas, políticos y medios de comunicación. Hacia él convergieron un conjunto de iniciativas parlamentarias, destinadas a modificar los mecanismos de selección de candidatos —tal el caso de las "primarias" o internas abiertas y de las candidaturas independientes— y la reforma de los métodos y fórmula de elección, es decir el sistema electoral —ley de lemas, uninominalismo, voto de preferencia— u otros aspectos del régimen electoral, tales como las características del sufragio —voto no obligatorio—, o la inclusión en el padrón electoral de sectores excluidos —conscriptos, extranjeros residentes—.

Muchas de estas cuestiones, como la obligatoriedad o voluntariedad del voto, por ejemplo, han quedado selladas por la reforma constitucional —artículos 37—, la cual procuró dar respuesta a algunas de las críticas que la sociedad señalaba; otras permanecen abiertas y como saldo deudor hacia la comunidad.

Debo decir, señor presidente, que en términos generales comparto el nuevo proyecto de ley que tiene por objeto adaptar la legislación electoral vigente a las reformas constitucionales

oportunamente introducidas, descartando la desmedida e indebida intervención del Poder Ejecutivo en cuestiones reservadas por la legislación actual a la competencia judicial que contenía el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo.

Aquel proyecto, en un acto sin convencimiento, alteraba bajo la excusa formal de revisar aspectos procedimentales y operativos los principios de transparencia y de seguridad que deben conducir toda normativa electoral, otorgando al Ministerio del Interior un protagonismo desmedido superador de la función de apoyo logístico a la Justicia que en la actual legislación posee.

Afortunadamente, se ha desechado la disposición que contenía el inciso e) del artículo 47 del proyecto inicial que establecía la prohibición durante siete días previos al día del comicio y hasta la hora del cierre de las mesas de la difusión y publicación por cualquier medio de encuestas, sondeos y estudios de opinión referidos al acto comicial.

Esta limitación lesionaba la libertad de expresión y resulta desde todo punto de vista violatoria de la libertad de prensa que consagran los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, ya que restringía irrazonablemente dicha facultad que los medios deben ejercer en forma plena para poder cumplir acabadamente el trascendente rol que desempeñan en las sociedades que han adherido al sistema republicano constitucional.

Sin duda, a seis meses o menos de las elecciones, encontrándose en curso las tareas electorales preparatorias, no era conveniente sustituir el Código vigente por otro como nos proponía el Ejecutivo, con el agravante de que dicho Código remitía continuamente a la reglamentación que el mismo poder administrador debía elaborar. De haberse accedido al cambio de las reglas de juego que las pretensiones iniciales contenían, se hubiera deteriorado la seguridad jurídica electoral, afectándose la transparencia del proceso electoral.

Ha sido acertado introducir sólo las normas indispensables para ajustar el Código a las nuevas previsiones constitucionales, postergando una reforma más profunda y de mayores alcances, que deberá surgir no como un nuevo acuerdo de los partidos mayoritarios sino a partir de un estudio consciente de nuestra experiencia electoral que refleje las nuevas modalidades culturales adquiridas por la sociedad argentina y con participación de todos los sectores interesados de la vida nacional.

No deberá desaprovecharse dicha ocasión para introducir al sistema algunas modificaciones —que cuentan con un amplio consenso social— destinadas a otorgar a la ciudadanía una mayor participación y control en la elección y selección de candidatos a diputados nacionales y convencionales constituyentes nacionales, modificándose el sistema de listas cerradas.

Por lo expuesto, el bloque autonomista al que represento votará en general por la aprobación del proyecto en tratamiento bajo la esperanza y el deseo de que los aspectos del debate electoral que quedan pendientes se resuelvan sin discriminaciones políticas, es decir, con participación de todos los sectores de la vida nacional, ya que el derecho electoral es el derecho de la democracia, según la feliz expresión de Indalecio Gómez pronunciada en el debate de la Ley Sáenz Peña.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: voy a hacer muy breves consideraciones; me siento obligado a ello en resguardo del respeto que nos debemos en la Cámara y de los procedimientos que deben cumplirse.

Es bueno, y resultaba imperioso, dar sanción legislativa a esta iniciativa para acomodar a las nuevas disposiciones constitucionales los procedimientos que se refieren a la elección directa, tanto de los miembros del Poder Ejecutivo, de la fórmula gubernativa, como también de los senadores nacionales que, hasta este momento, se venía rigiendo por el sistema de elección indirecta. Pero no podemos menos que hacer una referencia que no nos resulta grata respecto de la forma en que se ha procedido para arribar al proyecto que hoy vamos a votar y que hace pocas horas conocemos, por lo menos quienes integramos la minoría del cuerpo.

Todos sabemos que el Poder Ejecutivo remitió un frondoso proyecto de Código Electoral que, lógicamente, comenzó a ser estudiado por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Coetáneamente llegó a poder de los senadores que integrábamos esa comisión, y seguramente de muchos otros de esta Cámara, una serie de observaciones que se fueron haciendo respecto del proyecto que estaba siendo considerado en comisión; tales observaciones vinieron particularmente de la Cámara Nacional Electoral, con el peso de que ésta estaba conformada por integrantes de vasta experiencia en materia electoral, que podían hacer —como lo efectuaban— aportes interesantes, convenientes

para evitar errores y dar mayor transparencia a la sanción legislativa que estaba en tren de producirse.

Incluso, la propia Cámara Electoral llegó a sugerir que quizás en este momento, sobre el curso de los plazos, debíamos abocarnos específicamente al tema sobre el que sí era imperioso legislar, como es el de la elección directa en materia de la fórmula presidencial y de los senadores nacionales, teniendo en consideración lo que disponen las cláusulas transitorias, dejando para más adelante todo lo relativo a la vasta materia que integra el cuerpo electoral.

Esas sugerencias específicas realizadas por la Cámara Nacional Electoral sobre distintos aspectos del proyecto sometido a consideración del Congreso por el Poder Ejecutivo fueron recogidas por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Hubo un dictamen de mayoría que sucesivamente, mostrando no sólo una buena técnica jurídica sino también una elogiable disposición política para receptar las críticas que se hacían, fue modificando los predictámenes o los nuevos dictámenes que se hicieron, evidenciando que existía la suficiente capacidad como para acoger posiciones diferentes.

Pero he aquí que anteayer, si no estoy trascorrido, de pronto la Comisión de Asuntos Constitucionales dejó de existir y apareció una comisión extrarreglamentaria formada por los representantes de los dos partidos mayoritarios, poniéndonos a los demás senadores en la tarea no muy grata de tener que inquirir a miembros de ambos bloques sobre cuál era la realidad que estaba "cocinándose" y qué era lo que nosotros deberíamos considerar para votar.

Es decir que la Comisión de Asuntos Constitucionales dejó de existir, y yo, como uno de sus miembros, me siento dolido porque creo que jamás he dado pie a la suposición de que mi tarea es obstruccionista o malévola, ya que siempre he dado mi opinión, a veces coincidente con otras, a veces disidente, pero siempre dentro de la franqueza y con los fundamentos que en la verdad o en el error me correspondía plantear en el ejercicio del mandato senatorial que invisto.

Quiero destacar que no ha sido un procedimiento feliz; podrá haber sido eficaz pero, en tal caso, no contribuye a aquello que se ha dicho aquí de que fue con la contribución de todos los bloques. Por lo menos de parte del mío, no hubo contribución alguna porque no fui requerido. La daré con algunas observaciones que realizaré, que serán acogidas o no pero que como todas las

que realizo no están inspiradas por un sentimiento subalterno, sino por el deseo de que la ley sea aprobada de la mejor manera posible.

Hechas estas aclaraciones, quiero realizar dos o tres observaciones o sugerencias que me merece el proyecto de ley en consideración.

Todos sabemos que el artículo 54 de la Constitución es el que legisla lo referente a la elección de los senadores. De aquí en más, el Senado estará constituido por tres senadores por cada una de las provincias y también por la Capital Federal.

La cláusula quinta transitoria especifica lo siguiente: "Todos los integrantes del Senado serán elegidos en la forma indicada en el artículo 54 dentro de los dos meses anteriores al diez de diciembre del dos mil uno, decidiéndose por la suerte, luego que todos se reúnan, quienes deban salir en el primero y segundo bienio". La cláusula quinta es para aquellos que comiencen a integrar este Senado en el 2001.

Pero la cláusula cuarta transitoria legisla lo referente a las renovaciones que este cuerpo deberá tener en 1995 y 1998.

Con relación a lo específicamente referido a la ciudad de Buenos Aires, dice que las reglas mencionadas serán aplicables a las elecciones de los senadores por la Capital Federal en 1995 por el cuerpo electoral y en 1998 por el órgano legislativo. No tengo dudas de cuál ha sido la verdadera inspiración de los constituyentes. Incluso, en un libro recientemente publicado, del que es autor el señor presidente de la Convención Constituyente y de este cuerpo, juntamente con el doctor Dromi, se establece específicamente que en 1995 la elección se hará en forma directa. En realidad, la expresión constituyente no es clara. Digo esto porque hablar de cuerpo electoral puede dar pie a suponer que se trata del conjunto de electores o de un colegio electoral de aquellos que no tenemos tan buenos recuerdos.

Por estas razones creo que en el momento en que estamos dictando esta ley sería conveniente aclarar este tema. Es decir, que en el artículo correspondiente se hable de elección directa por el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, y no por el cuerpo electoral.

Quiero dejar sentadas dos observaciones más. Por el artículo 2º del proyecto que vamos a votar se sustituyen, entre otros, los artículos 153 y 154 del Código Electoral vigente. Sugiero que además de la muerte de los candidatos se prevea el supuesto de su incapacidad, para dar lugar a las consecuencias que la normativa prevé. Aquí

estamos hablando solamente de los supuestos de muerte o de renuncia. Pregunto a los señores miembros informantes de esta iniciativa por qué razón se ha excluido la incapacidad. Quisiera saber si hay alguna respuesta válida. ¿Es una omisión o se lo hizo deliberadamente? En este último caso, es decir, si la exclusión de este supuesto ha sido deliberada, pido que nos expliquen cuáles son los fundamentos que se tuvieron en cuenta para ello.

En segundo lugar, y con esto termino, creo que es conveniente que se faculte al Poder Ejecutivo, tal cual lo autoriza el artículo 1° de la ley 20.004, para ordenar el texto del Código Electoral con las modificaciones que ahora se le introducen, teniendo en cuenta que deberán renumerarse los artículos 158, 159, 160 y 161 de dicho cuerpo legal.

Los actuales artículos 158 y 159 del Código Electoral, que van a tener que ser sustituidos en función de lo que aquí se apruebe, no pueden desaparecer de la ley. De manera que tendríamos que asegurarlos en otras disposiciones. Estos dos artículos se refieren a los documentos cívicos que se utilizan en la votación y a las franquicias que se dan para el acto electoral.

Adelanto estas observaciones y confío en que se nos den las explicaciones consiguientes respecto de la omisión que he indicado.

Con estas pocas palabras dejo planteado el reclamo de lo que considero ha sido un acto no plausible al excluirmos de la deliberación que se hizo buscando un consenso, que nuevamente en este caso ha sido de dos y no de todas las partes integrantes de este cuerpo.

Por las razones expuestas dejo expresado mi apoyo en general al proyecto, con las observaciones y las críticas que señalé anteriormente.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Cendoya. — Señor presidente: la importante iniciativa que estamos considerando llega a este cuerpo por dos vías distintas.

En primer lugar, a través de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se promueven reformas globales al Código Electoral de la Nación, que fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y que ya cuenta con un dictamen en mayoría que introduce numerosas modificaciones a dicho texto.

En segundo lugar, que es lo que realmente estamos tratando ahora, por una iniciativa suscrita por integrantes de los distintos bloques de esta Cámara, que mejora sustancialmente las instan-

cias anteriores por cuanto es superior técnica y jurídicamente tanto respecto del proyecto del Poder Ejecutivo como del dictamen en mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Pero en rigor, y ya ha hecho justicia en esto el señor senador Aguirre Lanari, el principal objeto fue la justicia electoral, que observó tanto la iniciativa del Poder Ejecutivo como el dictamen producido por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Las observaciones han sido felizmente superadas, por lo que creo que la solución que se propone es la correcta. Las críticas de la justicia electoral estaban fundadas en diversos aspectos muy relevantes.

En primer lugar, se observaba la oportunidad. Resultaba inconveniente que a pocos meses de una elección general se modificara totalmente el Código, en razón de que un instrumento jurídico de esta naturaleza requiere de transparencia, objetividad e imparcialidad, que no son datos muy relevantes cuando se legisla de una manera tan global.

Asimismo, la justicia electoral —a quien es bueno rendirle homenaje, porque su historia es la historia del lento pero persistente adcentamiento de nuestras prácticas políticas— también criticaba aspectos técnicos del proceso por cuanto en el proyecto originario se concedían al Poder Ejecutivo nacional una cantidad de facultades reglamentarias. Esto era incompatible con el espíritu de una ley electoral que, por su naturaleza, debe ser reglamentaria hasta los mayores extremos.

Además, la iniciativa del Poder Ejecutivo restaba autonomía exclusiva en materia electoral a la justicia electoral nacional por cuanto consideraba también como integrantes judiciales del sistema a las juntas electorales que, como lo tiene resuelto reiteradamente la jurisprudencia, son organismos transitorios y de naturaleza administrativa, que se constituyen en oportunidad de cada elección y se disuelven a su término.

A su vez, en materia de escrutinio, proclamación y elección de presidente y vicepresidente de la República se establecía un mecanismo por el cual se podía llegar a la Corte Suprema obviando, de esta manera, que la justicia electoral es el tribunal definitivo de la causa y que, en materia electoral, sólo se puede ir ante la Corte por vía del recurso extraordinario cuando se violen o menoscaben garantías constitucionales.

En definitiva, señor presidente, el proyecto que ahora estamos considerando corrige todos los defectos que se le atribuían a la iniciativa del

Poder Ejecutivo nacional y ha encontrado, en el seno de esta Cámara, un marco de comprensión política que verdaderamente diluye o disipa cualquier tipo de discrecionalidad en el manejo de un tema que resulta tan importante para dar legitimidad y transparencia al sistema electoral argentino.

Es posible en oportunidad del tratamiento en particular que se formulen algunas observaciones. Así, por ejemplo, en relación a la elección del presidente de la República, el Código Electoral no define si los votos en blanco son votos afirmativos válidamente emitidos o deben ser excluidos del escrutinio, lo cual deja sentada la interpretación mayoritaria en el sentido de que deben ser excluidos del escrutinio, porque si bien han sido válidamente emitidos, no tienen un sentido afirmativo.

Esta posición, de mantenerse, transformaría nuestro actual sistema de balotaje en un modelo muy exclusivo dado que, en los hechos, al no computarse los votos en blanco, el piso del 45 por ciento queda reducido. Esto significa que esta institución, que se ha incorporado a nuestra legislación electoral con rango constitucional, no tendrá las características que tiene en otro país, en los que se considera el 50 por ciento del total de votos emitidos para determinar si debe hacerse la segunda vuelta electoral o no.

Al margen de la falta de definición al respecto, que implica la adopción de la posición mayoritaria sobre esta cuestión, quiero reiterar que el proyecto se limita a lo que debió haberse limitado siempre, es decir a instrumentar solamente lo que sea necesario para adaptar el sistema electoral argentino a la variación constitucional que se ha establecido en materia de elección de presidente y vicepresidente de la República y de senadores nacionales.

En este sentido quiero destacar la colaboración y el espíritu de convivencia política que se han expresado a través de este nuevo proyecto, que elimina todo tipo de sospecha sobre el proceso electoral, convirtiendo a este instrumento legal en una verdadera garantía para todos los ciudadanos.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: se han formulado hace un instante algunas críticas al procedimiento que ha precedido al debate de la cuestión en esta sesión del Senado nacional.

Debo admitir, señor presidente, la legitimidad de algunas de estas críticas y asumo también la cuota de responsabilidad que me cabe

por no haber puesto en tiempo a consideración de algunos senadores el proyecto de ley que hoy estamos tratando.

Lamentablemente, en el día de ayer sobrevinieron algunos episodios que no estaban previstos en la sesión, como ha sido la renuncia de un señor senador, que nos sustrajo por unas horas del estudio de este tema al que estábamos abocados casi con exclusividad. De tal manera que el anteproyecto de ley cuyo borrador me había comprometido a entregar a los senadores por Corrientes a las 12 del mediodía, recién se lo pude alcanzar a las 6 de la tarde.

Debo señalar también, señor presidente, que muchas de las críticas que se han formulado al proyecto original, y que en alguna medida estuvieron contenidas en un memorándum que nos hizo llegar la Cámara Nacional Electoral, resultan de alguna manera satisfechas por este proyecto de mínima que estamos debatiendo en esta oportunidad.

Así, por ejemplo, cuando se habla de delegaciones al Poder Ejecutivo, debo señalar que las mismas no existen en este proyecto. Tampoco existe intervención de la Corte en esta oportunidad; todo lo contrario, se consagra a la Asamblea Legislativa como el órgano encargado de realizar el cómputo electoral. Por otra parte, se mantiene la jurisdicción de la Cámara Nacional Electoral como máximo tribunal en esta materia.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Oraldo N. Britos.

Luego de esta pequeña acotación que he hecho inicialmente paso ahora, señor presidente, a responder a algunos de los planteos que formuló el señor senador por el Partido Liberal de Corrientes.

La primera de ellas es la referida a la expresión "cuerpo electoral" a que alude el artículo 3º con el nuevo artículo 165. Dicha expresión está contenida en la Constitución Nacional. Pero una cosa es el cuerpo electoral, que es la totalidad de los electores, y otra el colegio electoral, que es el que hasta el momento ha elegido a los senadores por la Capital Federal.

Entonces, señor presidente, "cuerpo electoral" debe entenderse como el conjunto de los ciudadanos o electores que están en condiciones de concurrir a un comicio.

En cuanto a la incapacidad inhabilitante, que está ausente de toda mención en el título VII como causa de acefalía entre la primera y la se-

gunda vuelta electoral, debo señalar que también tuve la misma preocupación cuando discutimos inicialmente este proyecto. Luego de haber escuchado algunos razonamientos, terminé por entender que era saludable la exclusión de este concepto en estos artículos porque hablamos de una acefalía en un muy breve período de tiempo, treinta días, entre la primera y la segunda vuelta. La incapacidad, entonces, puede ser factor que permita la manipulación electoral para la recomposición de listas. De tal modo que por vía de la incapacidad inhabilitante, por ejemplo la declaración de una enfermedad certificada por médico, aun por certificación oficial, se permite la sustitución de ese candidato a presidente o vicepresidente. Y entonces se admite que se recomponga la fórmula, objetivo que hemos procurado que no se dé bajo ningún aspecto en los comicios para la elección de presidente y vicepresidente de la Nación. Me refiero a la utilización de la incapacidad para reemplazar a la renuncia como un modo de suplir o reemplazar a un candidato a presidente o vicepresidente. Y, reitero, la incapacidad insurge por lo general un cierto tiempo para su determinación; y los treinta días que corren entre la primera y la segunda vuelta son obviamente muy exiguos para cumplir fehacientemente con ese trámite legal.

En cuanto a la reenumeración de los artículos, a la que también se ha hecho referencia, tengo entendido que esto estaría satisfecho con lo que dice el artículo 4° del proyecto en tratamiento, en donde se establece la modificación de la numeración de los artículos contenidos en el título Disposiciones Generales y Transitorias, capítulo único, de la ley 19.945. Allí expresamente se establece la reenumeración del articulado, que era una preocupación legítima del señor senador por Corrientes, del bloque liberal.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Britos). — Le solicitan una interrupción, señor senador.

Sr. Genoud. — La concedo, señor presidente.

Sr. Presidente (Britos). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por Corrientes, bloque liberal.

Sr. Aguirre Lanari. — Le solicité una aclaración porque me he venido manejando con el texto que nos entregaron ayer. Un texto mucho más prolijo me acaban de entregar en este momento; por eso quería saber cómo es.

En el texto que nos entregaron ayer no figura esto. Quiere decir que después de ayer han seguido perfeccionando el texto.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: renuevo mis excusas al señor senador por Corrientes y a todos aquellos que carecen del proyecto completo que estamos considerando. En nuestro apuro por entregar el borrador del anteproyecto, seguramente lo enviamos sin el último artículo, que entendemos es casi de forma; es el artículo 4°. Pero siempre estuvo en la intención de los redactores de dicho borrador corregir o reenumerar el articulado de este proyecto.

Reitero lo que he venido sosteniendo desde el comienzo con relación a este tema: todas las preocupaciones, observaciones y reservas que tenía el proyecto de Código Electoral quedan a nuestro juicio subsanadas por un proyecto absolutamente de mínima para la elección prevista para el próximo 14 de mayo, dejándose para el futuro un trabajo a conciencia respecto del código citado.

También recuerdo que en la reunión de presidentes de bloque de ayer estaba presente el señor senador Aguirre Lanari, quien manifestó su preocupación por la falta de conocimiento del proyecto, ante lo cual señalé que podía solicitarse una postergación de su tratamiento para que se tenga el tiempo debido para su análisis y evaluación. Sin embargo, el señor senador por Corrientes sostuvo en ese momento —como lo reiteró hoy— que no deseaba obstruir el tratamiento de un proyecto tan importante.

Pero desde un comienzo advertí que era totalmente razonable la crítica al procedimiento que lamentablemente hemos tenido que observar para llegar a tiempo a la sanción de esta norma.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Previamente deseo recordar que este proyecto necesita para su aprobación de una mayoría especial; a la vez informo que se encuentran en la casa treinta y cuatro señores senadores.

Sr. Menem. — Señor presidente: por supuesto adhiero a los fundamentos esgrimidos por los señores senadores que me han precedido en el uso de la palabra respecto de la aprobación de esta iniciativa tan necesaria para poner en marcha un mecanismo contenido en la actual Constitución Nacional.

Pero mi intervención se va a limitar solamente a formular una aclaración, desde mi punto de

vista necesaria, a propósito de una manifestación del señor senador por Córdoba con relación al cómputo de los votos en blanco. El tema ha generado polémicas y posiciones de algunos autores, como cuando se dijo que esto fue producto de un error o de una improvisación, haciéndose incluso especulaciones numéricas en cuanto a quién favorece o perjudica la situación de los votos en blanco.

El constituyente ha sido no sólo claro sino contundente cuando en los artículos 97 y 98 expresa que se tienen en cuenta los votos afirmativos válidamente emitidos, porque al hablarse de tales votos se está excluyendo a dos categorías de ellos: a los votos nulos y a los votos en blanco.

A los primeros, por cuanto al decirse "válidamente emitidos" significa que no se deben computar aquellos votos que por cualquier motivo hubieren resultado impugnados y dicha impugnación, por supuesto, hubiere sido receptada.

¿Por qué no se computan los votos impugnados, los votos nulos? Porque no existen; se trata de votos respecto de los cuales, al no ser válidos, no hay razón para que se los compute.

Ahora bien, respecto de estos votos no se plantearon mayores problemas, pero sí los hubo con relación a los votos en blanco.

Creo que no se discute —y el señor senador por Córdoba lo ha dicho bien— que la opinión mayoritaria es que cuando se dice "voto afirmativo" están excluidos los votos en blanco.

Es correcto que se hayan excluido los votos en blanco, señor presidente, por cuanto el que vota en blanco está manifestando su voluntad de no participar en la contienda. El voto en blanco significa que el ciudadano no opta por ninguno de los candidatos. No le gusta ninguno o es indiferente. Dice: "A mí no me interesa la elección. Yo vengo aquí a emitir mi voto, porque me obliga la Constitución. Vengo a cumplir con mi obligación de ciudadano. Por eso estoy en este acto electoral. Pero yo no quiero participar; no me gusta ninguno de los candidatos o no me interesa ninguno de ellos. A mí no me interesa que salga elegido Juan o Pedro. Yo emito el voto por una obligación legal que ahora tiene rango constitucional en el artículo 37, que establece el voto obligatorio. Pero no quiero participar, porque no me gusta ninguno de los candidatos".

Si es así, señor presidente, cómo se le va a dar el valor de decidir una elección a quien no ha querido participar en ella. Es un voto neutro; es un voto indiferente; de cualquier modo, es un voto muy legítimo.

No critico la posición del que asume esa actitud. Es tan legítimo votar positivamente como hacerlo negativamente. Pero, a los efectos de decidir la contienda electoral, es lógico que a aquel que ha adoptado una postura de indiferencia o de neutralidad, por más legítima que sea, no se le debe computar el voto porque, si llegáramos al extremo de que todos votaran en blanco, no podría decidirse quiénes serían las autoridades del país. Por reducción al absurdo, esto sería una forma de eludir una obligación constitucional.

Por ello, creo que no ofrece ninguna duda la interpretación de que no se computan ni los votos nulos ni los votos en blanco y que no ha sido una improvisación, un cálculo electoralista ni un descuido cuando no se incluyó a los votos en blanco, sino que obedece a la naturaleza que tiene el comicio y al sentido que tiene el voto en blanco.

Por eso, que quede bien claro que el ciudadano cumple con su obligación, pero no se lo tiene en cuenta a la hora del cómputo de los votos. Más aún, a partir de ahora, que se sabe que el voto en blanco no se computa, cuando el ciudadano vaya a votar ya sabe que su voto no será tenido en cuenta si lo hace en blanco. Por eso no puede tampoco alegar el día de mañana que ha sido sorprendido y que su posición ha favorecido a tal o cual fórmula.

Quería aclarar esta cuestión que hace al cómputo de los votos en blanco y a la razón de ser de esta posición asumida por los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional a los fines interpretativos. Por otra parte, esto no es una novedad porque ya se encuentra en otras Constituciones provinciales y también en alguna norma del derecho constitucional comparado como, por ejemplo, en la Constitución del Brasil.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Voy a ser muy breve, señor presidente. Deseo abundar un poco en los argumentos referidos a la exclusión de la incapacidad y a dejar solamente lo vinculado con la muerte.

Cuando hablaba de la opción que tuvimos que realizar entre preservar el valor de la claridad o la transparencia de la elección, fundamentalmente en la segunda vuelta, y la situación de desigualdad en que puede enviarse a elecciones a un partido político, el hecho de optar por la primera de estas alternativas tenía una razón de ser, bien apuntada por el señor senador por Mendoza: evidentemente, la incapacidad sobreviviente —éste es el término que deberíamos

haber incluido— al acto electoral de la primera vuelta debía ser declarada por vía judicial. No podíamos permitir que por vía de un certificado médico, de la opinión de un facultativo o de un académico admitiéramos la incapacidad; ésta debía ser decretada por vía judicial. En este caso, es imposible suponer que en quince días la cuestión judicial relacionada con la incapacidad sobreviniente —fundamentalmente por motivos mentales que podrían alegarse— pueda resolverse y ésta ser considerada una causal que si bien jurídicamente puede ser válida, no puede ser admitida social o políticamente como imputa o desprovista de todo tipo de connotación de cálculo electoral. Los supuestos son mínimos y la posibilidad del pronunciamiento judicial es casi imposible.

Por eso, se optó por mantener la transparencia y dejar solamente la posibilidad vinculada al fallecimiento. Es cierto que esto es opinable, pero he venido diciendo desde el principio que debíamos elegir entre una y otra situación, preservando uno u otro de los valores que queríamos priorizar.

Hay un segundo aspecto al que también se ha referido el señor senador por Mendoza. Hoy firmamos el proyecto y teníamos la convicción de que la Secretaría Parlamentaria lo había remitido a las bancas de los señores senadores. Hemos redondeado este nuevo proyecto, terminándolo de definir. Se establece ahora que los artículos vinculados a la documentación y al franqueo postal llevarán los números 167, 168 y 169, en reemplazo de los actuales 158, 159 y 160. Tal vez ésta sea la omisión que nos es atribuible, pero teníamos la plena convicción de que los señores senadores habían recibido el proyecto que tiene estado parlamentario.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cafiero. — Señor presidente: permítame que vuelva a las palabras del señor senador por La Rioja, cuando, con toda precisión, definió de qué manera el voto en blanco deja de ser un instrumento válido para expresar la voluntad popular. Déjeme entonces, señor presidente, que diga, a manera de epíteto, que en otras épocas de nuestra historia política el voto en blanco y la abstención fueron grandes armas de los partidos populares. Afortunadamente ahora, y de aquí en adelante, dejan de serlo. Pero en recuerdo de aquellos millones de argentinos que a través del voto en blanco y de la abstención luchamos contra las proscripciones, las dictaduras y los fraudes, quise decir estas palabras finales.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: desde luego que adhiero totalmente a lo manifestado por el señor senador por Buenos Aires. Pero no estamos hablando de una cuestión histórica sino de cómo se van a contar los votos cuando llegue la hora de hacerlo. Esto en absoluto significa desconocer posesiones políticas históricas válidas. Pero estas cuestiones no se van a tener en cuenta cuando deban contarse los votos sino si se considerarán los votos en blanco.

Como había dudas —inclusive fueron publicados algunos artículos al respecto— fue necesario dejar sentado, a título interpretativo, que los votos en blanco no se computan y cuál es la razón de ello.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cafiero. — Quiero hacer una aclaración final. De ninguna manera mis palabras pueden interpretarse como afectando o desmereciendo la brillante exposición realizada por el señor senador Menem sobre el significado del voto en blanco en las próximas elecciones nacionales.

Sr. Presidente (Britos). — ¡Son recuerdos tan lindos!

Sr. Genoud. — Que no volverán.

Sr. Presidente (Britos). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Britos). — Queda aprobado en general, con la mayoría especial que corresponde.

Sr. Genoud. — Primero hay que votar el tratamiento sobre tablas.

Sr. Menem. — Ya está votado el tratamiento sobre tablas.

Sr. Presidente (Britos). — Ya está votado sobre tablas. Tiene preferencia votada desde ayer.

Sr. Genoud. — No; me refiero al tratamiento sobre tablas.

Sr. Alasino. — Al principio se votó y aprobó el tratamiento sobre tablas.

Sr. Menem. — Ya se votó hoy el tratamiento sobre tablas.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Britos). — Estamos hablando de lo mismo. En consideración en particular el artículo 1°.

Sr. Alasino. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos. Y le ruego más rapidez.

Sr. Alasino. — En el último párrafo del artículo 60... Estamos hablando del 60, ¿no?

Sr. Presidente (Britos). — Sí; del que viene... (*Risas.*)

Sr. Alasino. — Señor presidente: el artículo 1º del proyecto se refiere a su vez, a varios artículos del Código. Por ello la votación en particular no podemos hacerla por artículo.

El artículo 1º se refiere, por ejemplo, al artículo 60. Al final de su cuarto párrafo, en lugar de "...con conocidos, ...", debe decir "...son conocidos, ...".

Sr. Genoud — Es un error gramatical. Es correcta la modificación que se propone.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Alasino. — Señor presidente: me acaban de apuntar otra modificación.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Britos). — Se va a votar el artículo 1º con la modificación propuesta por el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — No, no, señor presidente: el artículo 1º contiene casi todos los artículos a considerarse. Nosotros queremos plantear algunas otras modificaciones.

Sr. Presidente (Britos). — Señor senador: usted vaya enunciando las modificaciones antes de poner a votación el artículo 1º; vaya formulando las propuestas de modificación que desea plantear.

Sr. Alasino. — Está bien.

Sr. Presidente (Britos). — Está bien que ande el 60, pero... (*Risas.*)

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Alasino. — Señor presidente: al final del primer párrafo, el artículo 60 dice: "...propias del cargo para el cual se postulan y nos...". En lugar de "nos", debe decir "no".

Estamos en el 60; el que va de Tigre a Constitución. (*Risas.*)

Sr. Molina. — Así es; en el primer párrafo, última parte.

Sr. Alasino. — En el artículo 165...

Sr. Genoud. — Eso corresponde al artículo 3º.

Sr. Presidente (Britos). — Me parece que se pasó, señor senador.

Sr. Alasino. — Bueno.

Entonces, señor presidente, podemos votar el artículo 1º.

Sr. Presidente (Britos). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º con las modificaciones propuestas por el señor senador por Entre Ríos.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Britos). — Queda aprobado el artículo 1º con la mayoría especial que corresponde.

—Se enuncia y aprueba el artículo 2º.

Sr. Presidente (Britos). — Queda aprobado el artículo 2º con la mayoría especial que corresponde.

—Se enuncia el artículo 3º.

Sr. Alasino. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Señor presidente: en cuanto al artículo 165, tenemos un segundo párrafo que va a decir...

Sr. Genoud. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Alasino. — Sí.

Sr. Presidente (Britos). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: voy a solicitar una rectificación del voto porque en el artículo 2º, cuando se modifica el artículo 158, segundo párrafo, donde dice "artículo 63 de la presente ley", debe decir "artículo 163 de la presente ley".

Sr. Molina. — Tiene razón.

Sr. Alasino. — Que se reconsidere, señor presidente.

Sr. Presidente (Britos). — Será un error de tipo.

En consideración la moción de reconsideración del artículo 2º formulada por el señor senador por Mendoza.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Britos). — En consideración nuevamente el artículo 2º, con la modificación propuesta por el señor senador por Mendoza.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Britos). — Ha quedado aprobado el artículo 2º con la mayoría especial que corresponde.

Continuamos con la consideración en particular del artículo 3º.

Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Para el artículo 165 propongo un segundo párrafo, que dirá así: "Los partidos políticos o alianzas electorales al proponer los candidatos a senadores..."

Sr. Genoud. — ¿Me permite?

No es en el 165, sino en el 166.

Sr. Alasino. — Yo lo propongo como segundo párrafo del 165. Los otros pasarían a ser tercero y cuarto, respectivamente.

Sr. Genoud. — Sí, puede ser.

Sr. Alasino. — Así, sigue la Constitución.

El segundo párrafo será como sigue: "Los partidos políticos o alianzas electorales al proponer los candidatos a senadores, acreditarán ante la Justicia Electoral haber cumplido con las exigencias legales y estatutarias correspondientes".

Sr. Solari Yrigoyen. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Presidente (Britos). — Señor senador Alasino: el señor senador por el Chubut le ha solicitado una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Alasino. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Solari Yrigoyen. — Creo que sería más preciso decir: "... al proponer los candidatos a senadores nacionales..."

Sr. Presidente (Britos). — ¿Está de acuerdo, señor senador por Entre Ríos?

Sr. Alasino. — Lo que abunda no daña.

Sr. Cendoya. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Presidente (Britos). — El señor senador por Córdoba le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Alasino. — Con todo gusto.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Cendoya. — Creo que los partidos no proponen senadores a la Justicia Electoral, sino que inscriben candidatos a senadores. Me parece que es más correcto el uso del término que propongo. Es decir que cuando inscriban su candidato tendrán en cuenta los recaudos indicados por el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Genoud. — ¿Me permite?

Sr. Presidente (Britos). — ¿Se va a referir al mismo tema?

Sr. Genoud. — Sí.

Sr. Presidente (Britos). — Señor senador por Entre Ríos: el señor senador por Mendoza le solicita una interrupción sobre el mismo tema. ¿Se la concede?

Sr. Alasino. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Si bien el señor senador por Córdoba puede tener parte de razón, creo que deberíamos ajustarnos a los términos que utiliza la Constitución Nacional al referirse a este tema. En efecto, ella señala que los candidatos a senadores serán propuestos.

Aclaro que estamos ciñéndonos estrictamente a la terminología que aplica la Ley Suprema.

Sr. Presidente (Britos). — ¿De acuerdo, señor senador por Entre Ríos?

Sr. Alasino. — Sí. Sucede, señor presidente, que en realidad la Constitución Nacional debe ser operativa respecto de esta norma. Nosotros, a través de ella, estamos reforzando y reafirmando lo que señala la Constitución. Es casi lo mismo.

Sr. Aguirre Lanari. — ¿A qué artículo se refiere, señor senador?

Sr. Presidente (Britos). — El señor senador por Entre Ríos ha propuesto agregar un segundo párrafo al artículo 165 que se encuentra contenido en el artículo 3º del proyecto de ley en consideración.

Sr. Alasino. — Quiero aclarar, señor presidente, que hemos pretendido apartarnos lo menos posible del texto constitucional.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Britos). — Señor senador por Entre Ríos, el señor senador por el Partido Liberal de Corrientes le solicita una aclaración con relación a la modificación propuesta al artículo 3º.

Sr. Alasino. — Leo todo lo nuevo, señor presidente.

El segundo párrafo que propongo incluir en el artículo 165 dice así: "Los partidos políticos o alianzas electorales, al proponer los candidatos a senadores nacionales, acreditarán ante la Justicia Electoral haber cumplido con las exigencias legales y estatutarias correspondientes".

Quiere decir que si el presidente del partido quiere poner los dedos, tendrá problemas.

El tercer párrafo de ese artículo ahora será el que comienza con: "En la ciudad de Buenos Aires..."; y el cuarto párrafo será el que se inicia en: "Resultará electo...".

Además, en el primer párrafo del artículo 166, última parte, donde dice: "...de modo tal que, necesariamente...", debe decir: "...de modo tal que, en lo posible...". Es decir que se reemplaza "necesariamente" por "en lo posible". Aquí seguimos también lo que dice la Constitución.

Entonces, el artículo 166 quedaría redactado de la siguiente manera: "A los fines de la aplicación de la disposición transitoria cuarta contenida en la Constitución Nacional acerca de la elección de senadores nacionales por las provincias en ocasión de la renovación parcial trienal de 1995, las Legislaturas en cada provincia procederán a la elección de un senador, conforme con la disposición constitucional que establece que sean tres los senadores por cada distrito y que no resulten tres senadores del distrito de un mismo partido político o alianza electoral, de modo tal que, en lo posible, correspondan dos senadores nacionales a la mayoría y uno a la primera minoría". Lo demás sigue igual.

Sr. Presidente (Britos). — Se va a votar el artículo 3º con las modificaciones propuestas a los artículos 165 y 166 del Código Electoral Nacional.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Britos). — Ha quedado aprobado el artículo 3º con la mayoría especial correspondiente.

— Se enuncia y aprueba el artículo 4º.

Sr. Presidente (Britos). — Ha quedado aprobado el artículo 4º con la mayoría especial correspondiente.

— El artículo 5º es de forma.

Sr. Presidente (Britos). — Queda sancionado el proyecto de ley¹. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

Sr. Branda. — Señor presidente: quiero proponer que se incluya dentro de los asuntos a considerar hoy sobre tablas el tema por el que se da cumplimiento a la ley 23.307, referente a la designación por parte de este cuerpo de un senador titular y otro suplente a fin de integrar la Comisión Administradora de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación.

Desearía que el cuerpo aprobara este pedido en virtud de que se trata de la obra social de todos los legisladores y empleados del Congreso y debe normalizarse el funcionamiento de su comisión administradora.

Sr. Presidente (Britos). — Hay una propuesta del señor senador por Formosa.

Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — No he pedido la palabra, señor presidente. Estaba escuchando con mucha atención.

Sr. Presidente (Britos). — Por eso le di el uso de la palabra. (*Risas.*)

Sr. Branda. — Señor presidente: concretamente solicito el tratamiento sobre tablas de este asunto.

Sr. Presidente (Britos). — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador por Formosa.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: simplemente deseo señalar que el bloque radical apoya la moción formulada por el señor senador por Formosa.

Sr. Presidente (Britos). — Se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Branda. — Señor presidente: voy a proponer un proyecto de resolución por el que se designe a los señores senadores que, si cuenta